

EL SOCIALISTA

Centroamericano

234



Primera Quincena
Febrero 2017

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

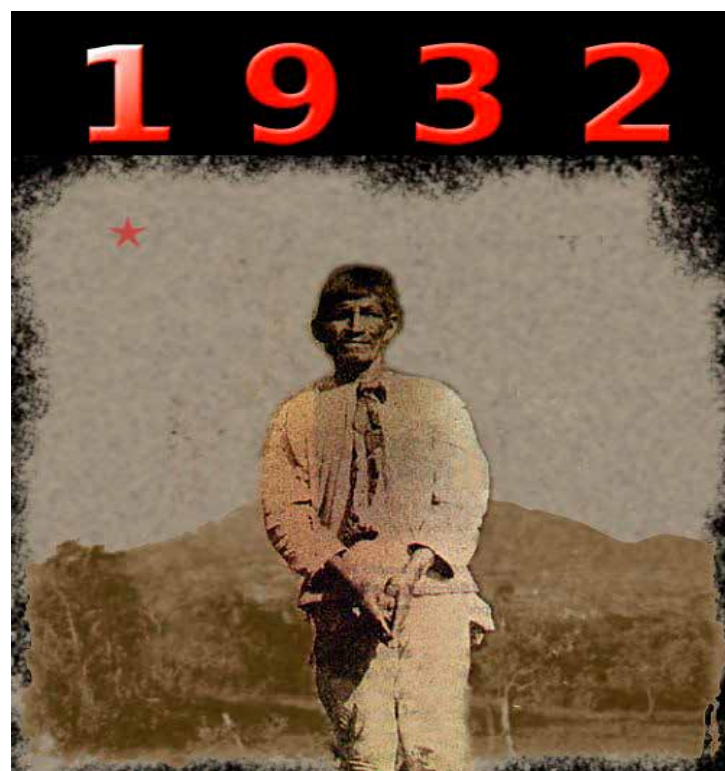
www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca



LA OFENSIVA DE TRUMP CONTRA MÉXICO Y LA RECOLONIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

HONDURAS.- Estudiantes de
Pedagogía pasan a la lucha en la
UNAH



GUATEMALA.- SINDICATOS NO
DEJAN DE LUCHAR



EL SALVADOR.- TOMA Y DESALOJO
EN LA PAZ



NICARAGUA.- EL GOBIERNO DE
ORTEGA, EL MAL MENOR

LA OFENSIVA DE TRUMP CONTRA MÉXICO Y LA RECOLONIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

A escasas semanas de haber sentado en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, acostumbrado a poses teatrales ante los medios de comunicación, inició una feroz ofensiva contra México y la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Trump firmó una orden ejecutiva ordenando construir el muro en la frontera con México, abortando la reunión con Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Hasta el momento no se sabe cuánto costará el famoso muro, ni con qué dinero se financiará. El muro físico ya existe en una parte de la frontera entre México y Estados Unidos, pero también existe un monumental muro invisible que detiene a los inmigrantes en la frontera sur de México con Centroamérica. Los gobiernos de Nicaragua y Panamá también han levantado un pequeño pero significativo muro que evita que los migrantes avancen hacia el norte.

Recientemente se ha descubierto que, desde la época de las redadas y deportaciones de Obama, son más los mexicanos que salen de Estados Unidos que los que intentan entrar de manera ilegal. Entonces, el tema de la inmigración ilegal con México es apenas una cobertura ideológica de Trump para avanzar hacia lo central: el tema económico.

El déficit comercial de Estados Unidos en relación a México aumentó de los 60.700 millones de dólares en 2015 a 63,200 millones en 2016. Por eso Trump insiste en que el tratado de libre comercio conocido como NAFTA es injusto y desventajoso para Estados Unidos.

Detrás de esta ofensiva contra la inmigración ilegal en general y contra México en particular, están las enormes presiones del imperialismo norteamericano que pretende doblegar al gobierno de México, obligarlo a renegociar el NAFTA. Canadá ya anunció que dejará a México a su suerte, y que establecerá un tratado bilateral con Estados Unidos.

Esta ofensiva de Trump se produce en momentos en que el gobierno de Peña Nieto, está aplicando planes neoliberales que lo han llevado a aprobar una contra reforma al sistema educativo, iniciar la apertura de las inversiones extranjeras en la industria estatal petrolera, y aplicar ajustes severos a la economía, como el "gasolinazo".

El gobierno de Peña Nieto es el más neoliberal de todos los gobiernos del PRI, contrario a las tradiciones nacionalistas revolucionarias, herencia de la revolución mexicana. Peña Nieto se ha arrodillado desde el inicio, cuando Trump era aún candidato, al recibirlo como si fuese jefe de Estado.

El gobierno de Peña Nieto, tembloroso, llama a la unidad nacional, y se refugia en los grandes grupos económicos de México para resistir la embestida de Trump en la mesa de negociaciones que ya está en marcha.

Contradictoriamente, la ofensiva de Trump ha despertado el sentimiento nacionalista y antiimperialista de las masas mexicanas. Es difícil anticipar cual será el resultado de la renegociación del NAFTA, pero si el gobierno de México claudica, como lo ha venido haciendo, entonces habrá una furiosa resistencia de las masas trabajadoras, porque cualquier concesión económica al imperialismo norteamericano, saldrá a costa del hambre y la miseria de los mexicanos.

Trump ha comenzado la recolonización de América Latina, arrodillando primero a México, después avanzará con Centroamérica y así sucesivamente. Para devolver la "grandeza" a Estados Unidos, como lo prometió en la campaña electoral, Trump debe recolonizar nuevamente a América Latina, debe de garantizarse el patio trasero, para poder enfrentar posteriormente a China y la Unión Europea, especialmente a Alemania.

Se avecinan años de lucha y del resurgimiento de la lucha antiimperialista en América Latina. Debemos de prepararnos para ello. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 234
Primera Quincena
de Febrero 2017

Impresión:
7 de Febrero de 2017

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Maximiliano Cavalera,
Gerson de la Rosa,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



DETENGAMOS LOS ATAQUES VIOLENTOS DE ACTIVISTAS DEL FMLN CONTRA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN!!

La intergremial sindical de Educación compuesta por ATRAMAEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales inició protestas, el día lunes 30 de enero, frente a la Dirección Departamental de Educación en el departamento de La Paz, denunciando violaciones y abusos laborales contra los trabajadores, por parte de Patricia Alvarado, jefa departamental, y para expresar condena pública de otros hechos ocurridos al interior del MINED que abarcan las negaciones del derecho a las audiencias, violaciones laborales, maltratos, abusos de autoridad y despidos arbitrarios.

ATRAMEC ha denunciado a través de un comunicado de prensa, que los 14 directores departamentales del país fueron nombrados en sus puestos, no en base a carrera sino mediante colocaciones de dedo, por el partido gobernante FMLN. En este sentido, la protesta en La Paz tomó un contenido de amplias demandas laborales en el marco de condena a los actos arbitrarios de Patricia Alvarado, de quien se pedía la remoción del cargo.

La oficina permaneció abierta lunes, martes y miércoles, pero a partir del jueves 2 se cerró totalmente hasta el sábado 4, día que los activistas sindicales fueron desalojados mediante una acción violenta, repudiable. Antes de las 14 horas activistas del FMLN se apostaron frente a las instalaciones tomadas por los trabajadores, que al cabo de un lapso de tiempo, con intervalo de ofensas y amenazas, procedieron a la agresión física de los manifestantes con el respaldo de la PNC, abriendo la puerta de servicio e ingresando en bandada, procediendo al desalojo de forma violenta amparados por la PNC que, no solo permitió sino además respaldó el proceder de estas personas.

El Comisionado Omar Joachin fue el oficial policial a cargo que se sumó a los agresores, advirtiéndole a los sindicalistas que si ofrecían resistencia, la PNC iba a proceder en su contra. Debemos denunciar que la procuradora departamental de la PDDH también fue cómplice de la agresión violenta contra los trabajadores, se hizo presente pero no para evitar los actos violentos contra los trabajadores. En ningún momento defendió

a los sindicalistas que sostenían una toma pacífica, en el marco de la defensa de sus derechos laborales, sino que fue un mudo asistente y colaboradora de la acción violenta de la turba o fuerza de choque del FMLN contra los trabajadores.

Posteriormente, la secretaria general de ATRAMEC, Marta Campos, se dirigió a la Fiscalía General de la República a realizar la respectiva denuncia, por ataques contra las



libertades sindicales y agresión física contra los trabajadores en lucha.

Este acontecimiento descubre el verdadero carácter antiobrero del gobierno del FMLN, sexto gobierno de este largo periodo neoliberal que, ante la tétrica crisis económica y el agudo déficit fiscal del país, responde con negociaciones conciliadoras con la derecha, al mismo tiempo que recorta el Escalafón para los trabajadores de la salud e inicia actos violentos contra los trabajadores de la educación en lucha.

Los hechos ocurridos este sábado 4 de Enero del 2016, nos dejan como amarga lección que no debemos permitir otro ataque violeto de los partidarios del FMLN en contra de las demandas de cualquier sindicato de trabajadores, mucho menos que la PNC sea utilizada como protectora de este tipo de ataques

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) condena los ataques de activistas del FMLN contra los trabajadores de la educación. Llamamos a todos los sindicatos, centrales obreras y campesinas, organismos de la sociedad civil, a luchar unidos por la

defensa de las libertades y derechos sindicales. De igual manera, si continúan este tipo de ataques, llamamos a los trabajadores y a los sindicatos a constituir piquetes o grupos de autodefensa de las marchas y luchas sindicales. El gobierno del FMLN pretende desmoralizar a los trabajadores de los sectores de salud y educación, que han dado muestras de descontento y han pasado a la lucha.

Llamamos a las bases del FMLN que sean consecuentes con su pasado revolucionario, y que se opongan a las directrices de sus jefes que organizan fuerzas de choque contra los trabajadores. En el pasado, era la derecha quien atacaba a los trabajadores en lucha, ahora con el gobierno del FMLN son los antiguos guerrilleros quienes organizan ataques violentos contra la lucha de los trabajadores, convirtiéndose en los más fieles defensores del modelo neoliberal que nos tiene sumido en el hambre la miseria y violencia social.

Ante la descomposición del capitalismo salvadoreño, los dirigentes del FMLN están actuando como sus grandes salvadores. Cuando se produjeron las luchas en salud por la defensa del escalafón, el FMLN dio instrucciones a maestros de ANDES 21 para que atacaran a los sindicalistas del MINSAL tal y como ahora ha ocurrido con los trabajadores de la educación, pero con la diferencia que esta vez procedieron con agresiones físicas.

Exhortamos a los organismos defensores de los derechos humanos, a exigir a la PDDH en El Salvador que deslinden del comportamiento de la procuradora en el departamento de La Paz, de igual manera exigimos que destapen los crecientes casos de violaciones a los derechos laborales que el gobierno del FMLN está impulsando, y que la PDDH está silenciando. Invitamos a las demás organizaciones sindicalistas a denunciar estos atropellos y a hacer acciones de solidaridad.

¡Detengamos los ataques violentos contra los trabajadores, por la conformación de piquetes o comités de autodefensa!

Centroamérica, 04 de Febrero 2017.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ■



ORGANIZACIONES SINDICALES SE MOVILIZAN

Por Leonardo Ixim

En las últimas dos semanas se han dado movilizaciones de sindicatos de trabajadores. Primero fueron el Sindicato de Empleados del San Juan de Dios y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), y el pasado viernes dos de febrero por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, contra la aprobación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, recién aprobado por el Congreso de la República

En el primer caso, se ha cuestionado a la ministra de salud Lucrecia Hernández con respecto a bonos incumplidos, una cantidad considerable de despedidos y el eterno problema del desabastecimiento en los hospitales de primer piso. El SNTSG anunció que las autoridades de salud han incumplido el Pacto Colectivo; esto dentro de una ofensiva impulsada por los sectores empresariales que sostienen que la crisis financiera del Estado es culpa de los trabajadores y por ende habrá que eliminar los pactos laborales entre los sindicatos del Estado y las autoridades institucionales.

Esta ofensiva ha aprovechado algunas canonjías existentes en los pactos colectivos, en este caso con los del SNTSG sobre viáticos a los dirigentes, que desde nuestro punto de vista, si no son regulados por las bases sindicales, genera dependencia y favores de los jefes estatales.

Las movilizaciones, en el caso del SNTSG fueron numerosas, realizando bloqueos en distintos puntos del país, mientras que las del Sindicato del Hospital del San Juan de Dios fueron menos numerosas, pero se centraron en presionar en sus instalaciones a las autoridades de salud. En el primer caso los líderes del SNTSG primero pedían no reunirse solo con Hernández, sino con el

presidente, algo que se dio una semana después de la reunión con la ministra; mientras que con el segundo sindicato se instaló también otra mesa de diálogo.

Lamentables fueron las declaraciones de uno de los líderes del SNTSG, Luis Alpírez, ante la postura gubernamental demagógica de señalar como causa del desorden administrativo en el sistema de salud la existencia de muchos sindicatos;



Alpírez adujo que ellos por ser los mayoritarios, son los únicos con quienes debería negociar. Lo cual demuestra su sectarismo, además que eso es relativo, porque el otro sindicato mencionado, pese a ser menos numeroso en cuanto su afiliación, coordina con una diversidad de sindicatos del interior del país.

Por otro lado, ante los señalamientos por la PGN sobre la capacidad financiera de las instituciones para acuarpar reivindicaciones laborales de los empleados y la capacidad de los sindicatos de discutir decisiones internas administrativas y políticas, estos puntos deben ser discutidos por los empleados. Debe haber un rotundo rechazo a sacrificar la nivelación laboral conformada por un salario básico, más las bonificaciones necesarias, y readecuar la capacidad financiera a partir de priorizar los ingresos vía impuestos al gran capital.

El gobierno anunció la incorporación de 30 mil empleados a plazas presupuestadas 011; sin embargo, la ministra declaró contradictoriamente que

si bien se realizaría esto, se priorizaría según la capacidad financiera del ministerio. Tanto los sindicatos como la misma Procuradora de los Derechos Humanos han denunciado que el desabastecimiento en los hospitales sigue siendo deficiente, esto ante las declaraciones de los jefes del ministerio, mencionando que está en un 86 %.

Las prioridades de la cartera según

Mack son priorizar la atención primaria, es decir los centros y puestos de salud, en línea con la medicina preventiva. Lo cual coincide con las propuestas elaboradas por el SEHSJD. Sin embargo, no se puede desatender los grandes hospitales de primer nivel, ante lo cual las autoridades siguen mostrando incapacidad para abastecerlos.

Como mencionamos el Movimiento Sindical Autónomo, conformado por las centrales sindicales CUSG, CGTG, MTC y UNSITRAGUA, manifestó contra la aprobación del convenio 175 de la OIT en las afueras del Ministerio de Trabajo, exigiendo que los jefes del ministerio, iniciando por la ministra de trabajo Aura Leticia Teleguario los atendiera. Los sindicalistas, entre otras demandas como incumplimiento de pactos colectivos en varias municipalidades, despidos en éstas y en empresas privadas, etc., pedían que Teleguario intercediera con el presidente Morales para que vetara el convenio de la OIT en mención. Al final fueron atendidos por la viceministra Mina Griselda Gonzales y un séquito de funcionarios.

Es vital que los sindicatos públicos y privados unan sus fuerzas, para exigir el cumplimiento de los pactos colectivos, el cese a los despidos en instituciones públicas y empresas, así como realizar movilizaciones para exigir el gobierno que no apruebe este nocivo convenio para la clase trabajadora. ■



EL EMBROLLO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL

Por Armado Tezucún

La idea de dotar a Puerto Quetzal, uno de los más importantes puertos del país, de nuevas instalaciones que permitan la descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir sus actuales instalaciones, en sí misma implica un importante avance. Sin embargo, debido a la corrupción arraigada en los gobiernos burgueses, su implementación nació torcida, y hasta la fecha diversos actores tratan de impulsarla mediante subterfugios legales.

En 11 de julio de 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina firmó un contrato de usufructo con el grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), y su recién creada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), eludiendo el requisito legal de efectuar una licitación pública y escondiendo que en los hechos se trataba de una concesión totalmente desventajosa para el Estado. A pesar de la oposición de los sindicatos de Puerto Quetzal, la empresa española inició las obras de construcción de la TCQ, al haber recibido los terrenos de parte del gobierno en 2013.

En abril de 2016, la Cicig y el Ministerio Público dieron a conocer que desde los primeros meses de 2012, agentes del gobierno y de TCB negociaron una comisión por US\$ 30 millones para que las gestiones para el contrato fluyeran sin dificultad; US\$ 24 millones se hicieron efectivos de esta comisión, recibiendo su parte el ex binomio presidencial Pérez Molina – Baldetti.

En 2015, en base a un análisis de la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación solicitó declarar nulo o lesivo el contrato con TCQ, pero el caso aún se encuentra en

trámites en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo cual sigue vigente. El caso se complicó aún más porque TCQ vendió su proyecto en Puerto Quetzal al gigantesco grupo danés Maersk, a través de su filial APM Terminals, y el Banco Mundial dio un préstamo millonario para la construcción de la terminal y además invirtió US\$ 7.7 millones en TCQ.



Representantes de Maersk visitaron el país y acordaron con el gobierno pagar una multa de US\$ 43.2 millones al Estado, como parte de las condiciones para poder operar.

Los trabajos en TCQ están prácticamente finalizados y la empresa está lista para iniciar operaciones. El presidente Morales y el empresariado están dispuestos a proceder con la concesión cueste lo que cueste. El 3 de noviembre de 2016 el Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa para otorgar la concesión de TCQ por 21 años. Sin embargo, el Congreso no la aprobó en el plazo previsto y la nueva Comisión de Finanzas no contempla dentro de sus prioridades el análisis del caso TCQ.

Los interesados en la concesión encontraron un atajo para lograrla. El Congreso tenía un plazo de 40 días para aprobar la concesión, que venció el 29 de diciembre. Según la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin, ahora la decisión quedaría en manos de las autoridades de la Empresa Portuaria

Quetzal (EPQ). Ésta decidió que la terminal puede iniciar operaciones media vez obtenga los permisos requeridos. TCQ consiguió un acuerdo con la municipalidad del Puerto de San José para obtener un permiso de licencia de construcción, a pagar en un plazo de 20 años y por una cantidad menor a la requerida inicialmente. Otros permisos necesarios son el del Ministerio de Comunicaciones y de la Superintendencia de Administración Tributaria, además de un reglamento de operaciones. De esta manera, la EPQ y la TCQ estarían evadiendo la autorización del Congreso para poder operar.

Mientras, la Contraloría General de Cuentas manifestó su oposición a la entrada en operaciones de TCQ, pues sostiene que primero tiene que ser anulado el contrato firmado por el gobierno de Pérez Molina y luego se tiene que convocar a una licitación internacional, como manda la ley. La titular de la PGN sostiene que la concesión a TCQ es la única opción posible pues no se puede hacer una licitación mientras esté vigente el contrato anterior. Como telón de fondo, el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, se ha lamentado una y otra vez de que la situación económica de la empresa es insostenible, que ha estado ocho meses sin ingresos porque no puede operar ni obtiene fondos del Estado, que en diciembre tenía que pagar US\$ 4 millones a los bancos y no pudo hacerlo y que en consecuencia urge que inicie sus operaciones (La Hora 31/01/17).

Nuestra postura es que TCQ debe pasar a manos del Estado, para frenar, de una vez por todas, los manejos corruptos que se han dado desde 2012, y que sea administrada por los trabajadores de la portuaria. Apoyamos a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, el único de los sindicatos que ha estado denunciando las artimañas utilizadas para permitir la operación a manos privadas de TCQ. ■

TOMA Y DESALOJO EN LA PAZ

Por: Alberto Castro.

Las protestas de la intergremial sindical de Educación compuesta por ATRAMAEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales frente a la Dirección Departamental de Educación en el departamento de La Paz para denunciar las violaciones y abusos laborales en contra de los trabajadores administrativos por parte de Patricia Alvarado, jefa departamental, han sido un avance en cuanto a las acciones de hecho, al haber procedido a la toma pacífica de las instalaciones durante 6 días, que iniciaron el mismo lunes 30 de enero y culminaron el sábado 4 de febrero, día del violento desalojo perpetrado por una turba enviada por el FMLN. Las protestas desde el primer estuvieron marcadas por agresiones de la PNC, el viernes 3, se corrió el rumor de desalojo por la UMO. Aun no se creía que el desalojo iba ser llevado a cabo por los grupos de choque. Es meritorio reconocer que del 30 de enero al 1 de febrero la oficina estuvo abierta, pero la negativa de dialogo de las autoridades del MINED obligaron a que se procediera al cierre total a partir del 2 de febrero.

Los motivos de las demandas

En el comunicado ATRAMEC exigió a los 14 directores departamentales del país que respeten la normativa jurídica que resguarda los derechos laborales contemplados dentro de los convenios OIT, Código de Trabajo y Ley del Servicio Civil. También dentro de las demandas se solicito al Presidente, Salvador Sánchez Ceren y a su ministro de educación, Carlos Canjura la deposición del cargo de Alvarado. En la oficina de La Paz trabajan administrativos. ATRAMEC como corresponde se coloco al frente de la protesta con el respaldo de toda la intergremial que tiene representación de docentes y administrativos, es el ente sindical aglutinante de este sector que

en su conjunto sostiene negociaciones que están en vilo, por lo que esto queda marcado como una profundización en la lucha de educación, que se suma la lucha que actualmente sostienen los trabajadores de salud por el Escalafon.

La protesta en La Paz contiene amplias denuncias y demandas laborales del interior del MINED que son: las negaciones del derecho a las audiencias,



violaciones laborales, maltratos, abusos de autoridad y despidos arbitrarios, el comunicado de prensa ATRAMEC señalo que los 14 directores departamentales del país están en sus puestos no en base a carrea sino mediante colocaciones de dedo por el partido gobernante FMLN. Luis Alvarado secretario de de organización y estadísticas de ATRAMEC expreso: "esta directora atropella a los empleados. Hay casos como el mío, que por ser sindicalista no me dejan entrar a esta oficina. Por años hemos venido denunciando lo que ella y otras jefaturas hacen contra los trabajadores.

Ella maltrata a los sindicalistas, nos niega el acceso a las instalaciones y hasta el uso de sillas. Ella viola convenios internacionales de asociación sindical". Lo vertido por el dirigente sindical da a entender la intransigencia del porque se actúa hasta ahora, cuando las violaciones sindicales se vienen arrastrando desde hace tiempo. Los ajustes fiscales golpean a los trabajadores públicos, las políticas

fiscales para el rescate económico se basan en el sacrificio de los trabajadores públicos, esto explica por qué las jefaturas endurecen los tratos hacia los sindicalistas, por lo tanto el caso de esta lucha en La Paz no se produce de manera casual. Actualmente El Salvador pasa por una efervescencia de luchas de los trabajadores públicos ante el desagravio del GOES que ante la terrible situación económica y fiscal del país opta por negociar con la derecha y se alinea en favor de las recomendaciones económicas que diera el año pasado el FMI, que son el empuje de todas las nefastas medidas que han tenido resistencia en los sindicatos independientes. La cadencia de luchas de salud y educación vienen a ser el resultado de una amalgama de situaciones que cada vez se recrudecen a medida que avanzan los ajustes fiscales.

El desalojo: una sucia maniobra

Justo al medio día un grupo de personas que habían llegado en buses de transporte privado se apostaron frente a las instalaciones, posteriormente ingresaron por la fuerza a través de la puerta de servicios, amparándose en la PNC, que respaldo a los agresores, el inspector Omar Joachin, oficial a cargo respaldo tal agresión amenazando a los sindicalistas que si se oponían la PNC iba a proceder en su contra, en el transcurso de esto la procuradora departamental PPDDHH fue cómplice, al hacerse presente pero no para menguar la situación, llegó para situarse junto a la PNC y como el resto de la semana, ese día no se dirigió a atender las demandas de los sindicalistas ni a intervenir por su integridad física. El desalojo fue rápido, los sindicalistas superados por una turba fanática que tenía apoyo policial no opusieron resistencia y accedieron a la entrega de las instalaciones. ■



RECAUDACIÓN SIEMPRE RECAE EN LA CLASE TRABAJADORA Y LA CLASE MEDIA

Por German Aquino

La crisis económica por la cual atraviesa el gobierno del FMLN le está obligando a realizar medidas para ver de dónde saca dinero, siendo la clase trabajadora y la clase media, quienes que lidiar con el pago de los impuestos como el de la renta, IVA

Incrementaran acciones para el pago de la renta

Quien tendría que cargar la crisis serían los ricos tanto de la rancia burguesía y de la burguesía emergente ligada al FMLN y los funcionarios de gobierno de alto nivel como ministros, asesores, diputados. Etc. Pero es todo lo contrario como si fuera poco la clase trabajadora en la mayoría de casos ha sido excluido de los subsidios en agua, energía eléctrica, gas, etc. Como si fuera poco el actual gobierno a través del Ministerio de Hacienda busca implementar nuevas medidas encaminadas a tener mayor recaudación derivadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante el cual el estado se queda con una parte del salario.

En el gobierno de Mauricio Funes se modificaron muchos aspectos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), contrario a lo que decía el gobierno muchos trabajadores con salarios bajos pasaron a pagar dicho impuesto, dicho reforma se presentó como algo bueno, pero fue todo lo contrario para la clase trabajadora. Actualmente el gobierno prepara nuevas medidas para asegurar ingresos a través de la renta al respecto señalo que: que tomará nuevas acciones para mejorar la recaudación de impuestos...retendrán hasta 10 % del salario de personas naturales que tengan deudas con el fisco y hasta un 25 % de los ingresos de empresas con mora... “Pensamos implementar de manera rigurosa la normativa legal vigente que comprende la anotación preventiva de inmuebles, vehículos y la inmovilización de cuentas bancarias” (LPG. 02/02/17).

Existen muchos trabajadores que debido a la crisis y viendo el manejo de los fondos por parte del estado no realizan dicha declaración. Las acciones que busca implementar el Ministerio de Hacienda afectaran a los trabajadores que no realizan dicha declaración.

Que los grandes empresarios paguen impuestos

Las acciones del Ministerio de Hacienda deberán obligar a los grandes empresarios a pagar sus impuestos, pero el gran empresariado elude el pago de muchos impuestos recurriendo a las mismas instituciones del sistema jurídico burgués, cosa contraria el trabajador no tiene escapatoria o paga o paga. Por lo



tanto, debemos exigir que el gobierno obligue por igual a los grandes empresarios a pagar impuestos.

Gobierno debe hacer buen uso de los fondos

Por una parte, el gobierno tiene que lidiar con la crisis pero por otro lado aprueba un presupuesto desfinanciado pretendiendo cargar dicho financiamiento a los trabajadores, a la vez misma reprime a las organizaciones sindicales que luchan contra esas medidas. El gobierno se queja de la falta de recursos, pero asigna recursos a instituciones y organizaciones no gubernamentales las cuales no son del estado, esas asignaciones se vienen realizando desde los gobiernos areneros, las funciones que realizan dichas organizaciones deberían ser realizadas por

las respectivas instituciones del estado, lo cual le permitiría ahorrar al gobierno.

Otro ejemplo que podemos ver es el pago de subsidios que el gobierno hace a las empresas privadas distribuidoras de energía eléctrica, cuando en realidad el estado no tiene que pagarles a dichas empresas subsidios, por el contrario, dicha comercialización debería de estar en manos del estado bajo control de los trabajadores; ya que dicho rubro fue privatizado en los gobiernos de arena y dicha infraestructura fue montada con fondos del estado.

Respeto al salario y menos renta

Para el gobierno el que un trabajador gane poco más del mísero salario mínimo actual ya no es pobre por lo cual desde su óptica no debe gozar de los beneficios de los subsidios lo cual hace que ese salario se reduzca y no alcance, por lo tanto como trabajadores debemos exigirle al gobierno que reduzca el impuesto sobre la renta, que respete el salario de los trabajadores, el gobierno debe ser flexible con la clase trabajadora y exigente con el gran empresariado. Como una medida de reducción de costos el actual gobierno debe revertir la privatización de los servicios públicos.

Los trabajadores somos quienes mantenemos al estado y le hacemos el dinero a los grandes empresarios por lo tanto debemos exigir y manifestarnos por un manejo transparente de los fondos públicos los cuales deben ser manejados por las mismas instituciones estatales quienes deben brindar los respectivos servicios al pueblo salvadoreño. Parece incongruente que mientras al estado le falta dinero los grandes empresarios continúan acumulando riquezas y surge un núcleo empresarial ligado al partido en gobierno. No se trata de no pagar impuestos, sino que dichos impuestos sean acordes a la realidad de la trabajadora y que dichos fondos sean destinados a servicios públicos en beneficio del pueblo salvadoreño. ■

¿QUÉ REPRESENTA LA ALIANZA DE LA OPOSICIÓN?

Por Justo Severo Izquierdo

Como era de esperarse, el 15 de enero del año en curso, la oposición selló una alianza partidaria entre el PAC, PINU y LIBRE, con el propósito de impedir el proyecto reeleccionista del actual mandatario Juan Orlando Hernández. El pacto se realizó en la asamblea general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), donde el coordinador general de este instituto político, Manuel Zelaya Rosales, firmó el compromiso junto a Salvador Nasralla, presidente del Partido Anticorrupción (PAC), Eva Fernández, representante del movimiento “Corazón Azul” del Partido Nacional, Guillermo Valle, representante del Partido Innovación y Unidad (PINU) y Carlos Orvin Montoya del Partido Liberal. Para entender el fenómeno de lo que está ocurriendo en Honduras, es importante abordar tres aspectos de la actual coyuntura: el fortalecimiento de Juan Orlando Hernández, el resquemor que ha causado el tema de la reelección y la reacción de los grupos políticos.

Fortalecimiento de JOH

El país en la última década se ha hundido en la miseria y en la barbarie. Fenómenos como la pobreza, emigración, desempleo, crisis económica y falta de oportunidades han orillado a Honduras a vivir extremadamente los niveles de violencia, a tal grado que es considerado uno de los países más violentos del mundo. La violencia, un callejón sin salida provocado por las bandas criminales, narcotráfico y la extorsión, donde la

policía y sectores del ejército se ven involucrados en estas estructuras.

Después de la violencia tenemos el problema de la impunidad. Muchos periodistas, abogados, activistas, dirigentes, defensores de los Derechos Humanos y todo opositor al sistema, pierde la vida sin que sus casos sean resueltos y se halle a los autores



materiales e intelectuales del crimen. Con esto, cada vez el país se destruye y se disuelve. Desde el gobierno de Porfirio Lobo, se crearon las condiciones para perfilar al Partido Nacional y a JOH como los grandes salvadores de la nación; de ahí el diseño y consolidación de una campaña de continuismo. Es así que JOH poco a poco fortalece su proyecto, sin importar los antecedentes de pasar por encima de la ley. En 2012, como presidente del congreso, JOH destituyó a varios jueces de la Corte Suprema y llenó la magistratura con sus aliados de manera ilegal. En el 2014 su partido disolvió una comisión independiente de reforma a la seguridad pública que era ampliamente respetada, e hizo caso omiso a sus recomendaciones.

Cuando llega a la Presidencia de la República, el último logro y el más codiciado es haber ganado la presidencia y el control de la Corte Suprema de Justicia.

Antes había derogado las figuras jurídicas aprobadas en el 2013, frenó las reformas electorales como la segunda vuelta, la emisión de una nueva tarjeta de identidad al igual que el control del Registro Nacional de las Personas, logró reformar la Ley de funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la instancia desde donde alcanza control legal de todos los

podere del Estado. Luego emprendió una lucha contra todo aquello que pudiera afectar la visión del país desde el exterior; montó una campaña mediática según la cual Honduras era el mejor país para vivir.

Su intención era atraer capitales, para lo cual debía, necesariamente, ofrecer seguridad jurídica y ciudadana. Entabló una lucha contra el crimen organizado y la corrupción, respaldada y ordenada por Estados Unidos, donde logró encarcelar con la figura de la extradición a un sector del narcotráfico donde estaban involucrados políticos y familiares de políticos del Partido Nacional y Partido Liberal; al mismo tiempo logró abrir juicios contra los peces pequeños del asalto al Seguro Social. Aprobó la creación de las “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE), una iniciativa cuestionada en todo momento.

En ese sentido, el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó a envalentonarse y mostrar signos cada vez más pronunciados de autoritarismo; con sus actos demagógicos logró fortalecer el clientelismo y la base social del Partido



Nacional. Mientras tanto, los dos grupos políticos más importantes como el liberalismo y Libre, contribuyeron por acciones y omisiones al fortalecimiento de Joh, lo que sus opositores pensaron. Fue sistemáticamente copando las instituciones, copando el congreso, comprando gente y fortaleciendo su base social; esto coloca en cierta desventaja al Partido Liberal, porque en cierta medida lo subordina. En el caso de Libre, su dirigencia pensó que su partido podía transformarse en el polo aglutinante contra el reeleccionismo de JOH, pero aceptando el reeleccionismo, tremenda contradicción; en realidad, ese es el verdadero problema de la dirigencia de LIBRE, que aceptaba el reeleccionismo y hacía caso omiso cuando se discutía el tema de la reelección, en vista que siempre pensaron en que Mel podría ser nuevamente candidato. Una de las grandes sorpresas ocurridas en el 2016, es que Mel está tan desprestigiado y el partido sufre una tremenda crisis causada por la salida de dirigentes con fuerte simpatías de sus bases; éstos denunciaron delitos de corrupción y caudillismo, típico de las mañas del bipartidismo. Al final Mel no pudo ser candidato y tuvo que recurrir

Resquemor en el tema de la reelección

En segundo lugar, la reelección causa aversiones en Honduras por la experiencia del carriato y de las dictaduras militares. Tiempos oscuros aquellos donde no había la más mínima libertad democrática, todas las decisiones del país giraban en torno a un caudillo como Tiburcio Carías Andino, que dirigió el país por 16 años. Tanto en el gobierno Cariista como en los gobiernos militares, se vivió etapas de terror y angustia con las desapariciones, asesinatos, torturas y la famosa frase cariista de Encierro, Entierro y Destierro. El hondureño que conoce esta historia y que al escuchar a JOH proferir la siguiente frase: “Yo seré un nuevo Carías”, causa pavor y por todo lo que está ocurriendo, claro que hay un rechazo de la mayoría de la población. Hasta el momento, a partir del año ochenta y dos hasta la fecha, nadie se había atrevido a tocar los artículos pétreos de la constitución, pero JOH, en una maniobra apoyándose en la experiencia de Daniel Ortega y Óscar Árias, logra a través de una sentencia, derogar esos artículos, con eso abre el camino de la reelección y la posibilidad de cumplir sus palabras cuando dijo que “Honduras necesitaba cincuenta años de gobierno del Partido Nacional” para poder sacarla adelante.

lo que sus opositores pensaron. Fue sistemáticamente copando las instituciones, copando el congreso, comprando gente y fortaleciendo su base social; esto coloca en cierta desventaja al Partido Liberal, porque en cierta medida lo subordina. En el caso de Libre, su dirigencia pensó que su partido podía transformarse en el polo aglutinante contra el reeleccionismo de JOH, pero aceptando el reeleccionismo, tremenda contradicción; en realidad, ese es el verdadero problema de la dirigencia de LIBRE, que aceptaba el reeleccionismo y hacía caso omiso cuando se discutía el tema de la reelección, en vista que siempre pensaron en que Mel podría ser nuevamente candidato. Una de las grandes sorpresas ocurridas en el 2016, es que Mel está tan desprestigiado y el partido sufre una tremenda crisis causada por la salida de dirigentes con fuerte simpatías de sus bases; éstos denunciaron delitos de corrupción y caudillismo, típico de las mañas del bipartidismo. Al final Mel no pudo ser candidato y tuvo que recurrir

rodillas aceptando una candidatura única, que es muy probable que recaiga en Nasralla, en combinación con Xiomara Castro y que el PINU, un partido pequeño que se plega, significa que hay una presión de las bases para tratar de obtener el triunfo electoral. La perspectiva electoral para este 2017 se volcó a tres bloques, por un lado, el Partido Nacional, por otro el partido Liberal que actúa de comparsa en última instancia del Partido Nacional y finalmente esta alianza. Al final, alertamos que las condiciones en que se está dando esta alianza, es una coalición bastante oportunista, en el sentido que pretenden explotar el descontento contra JOH, que por cierto, es justo, dejando a un lado los programas. Esta alianza es completamente electoral, y muy probablemente tiene un objetivo defensivo: el de protegerse de los ataques del oficialismo. En este caso los trabajadores y la izquierda quedan completamente disueltos, sobre todo, en este caso los militantes de izquierda de Libre han quedado diluidos; esta izquierda no se diferencia del liberalismo en absoluto, todas las tendencias que se conformaron dentro de la plataforma de lucha del FNRP, le claudican a Mel y a esta alianza. La alianza en sí no representa ningún beneficio para los trabajadores porque no contiene ninguna consigna o programa que beneficie a los trabajadores, lo que pretende es explotar el sentimiento anti continuista de JOH, lo que está por verse.

rodillas aceptando una candidatura única, que es muy probable que recaiga en Nasralla, en combinación con Xiomara Castro y que el PINU, un partido pequeño que se plega, significa que hay una presión de las bases para tratar de obtener el triunfo electoral. La perspectiva electoral para este 2017 se volcó a tres bloques, por un lado, el Partido Nacional, por otro el partido Liberal que actúa de comparsa en última instancia del Partido Nacional y finalmente esta alianza. Al final, alertamos que las condiciones en que se está dando esta alianza, es una coalición bastante oportunista, en el sentido que pretenden explotar el descontento contra JOH, que por cierto, es justo, dejando a un lado los programas. Esta alianza es completamente electoral, y muy probablemente tiene un objetivo defensivo: el de protegerse de los ataques del oficialismo. En este caso los trabajadores y la izquierda quedan completamente disueltos, sobre todo, en este caso los militantes de izquierda de Libre han quedado diluidos; esta izquierda no se diferencia del liberalismo en absoluto, todas las tendencias que se conformaron dentro de la plataforma de lucha del FNRP, le claudican a Mel y a esta alianza. La alianza en sí no representa ningún beneficio para los trabajadores porque no contiene ninguna consigna o programa que beneficie a los trabajadores, lo que pretende es explotar el sentimiento anti continuista de JOH, lo que está por verse.

rodillas aceptando una candidatura única, que es muy probable que recaiga en Nasralla, en combinación con Xiomara Castro y que el PINU, un partido pequeño que se plega, significa que hay una presión de las bases para tratar de obtener el triunfo electoral. La perspectiva electoral para este 2017 se volcó a tres bloques, por un lado, el Partido Nacional, por otro el partido Liberal que actúa de comparsa en última instancia del Partido Nacional y finalmente esta alianza. Al final, alertamos que las condiciones en que se está dando esta alianza, es una coalición bastante oportunista, en el sentido que pretenden explotar el descontento contra JOH, que por cierto, es justo, dejando a un lado los programas. Esta alianza es completamente electoral, y muy probablemente tiene un objetivo defensivo: el de protegerse de los ataques del oficialismo. En este caso los trabajadores y la izquierda quedan completamente disueltos, sobre todo, en este caso los militantes de izquierda de Libre han quedado diluidos; esta izquierda no se diferencia del liberalismo en absoluto, todas las tendencias que se conformaron dentro de la plataforma de lucha del FNRP, le claudican a Mel y a esta alianza. La alianza en sí no representa ningún beneficio para los trabajadores porque no contiene ninguna consigna o programa que beneficie a los trabajadores, lo que pretende es explotar el sentimiento anti continuista de JOH, lo que está por verse.



nuevamente a su cónyuge Ximara Castro de Zelaya. Es claro que tenemos una situación muy particular. Los sectores opositores al continuismo de JOH exigen a los partidos unidad. Efectivamente, para que se haya dado la unidad entre el PAC, cuyo candidato Salvador Nasralla tiene un discurso vigoroso y eufórico, pero errático, y que Mel termine doblando

nuevamente a su cónyuge Ximara Castro de Zelaya. Es claro que tenemos una situación muy particular. Los sectores opositores al continuismo de JOH exigen a los partidos unidad. Efectivamente, para que se haya dado la unidad entre el PAC, cuyo candidato Salvador Nasralla tiene un discurso vigoroso y eufórico, pero errático, y que Mel termine doblando

Es claro que tenemos una situación muy particular. Los sectores opositores al continuismo de JOH exigen a los partidos unidad. Efectivamente, para que se haya dado la unidad entre el PAC, cuyo candidato Salvador Nasralla tiene un discurso vigoroso y eufórico, pero errático, y que Mel termine doblando

Reacción de los grupos políticos

Al final, JOH avanzó más de

programa que beneficie a los trabajadores, lo que pretende es explotar el sentimiento anti continuista de JOH, lo que está por verse.





PLANES DE TRUMP: NEOPROTECCIONISMO Y RECOLONIZACIÓN DEL PATIO TRASERO

Por Úrsula Coj

Si la elección del magnate Donald Trump, un verdadero outsider, fue calificada por la mayoría de observadores políticos y medios de comunicación del orbe como una sorpresa, sus primeras medidas, que en la campaña electoral ya había anunciado, han causado incertidumbre a nivel internacional.

Trump emergió arrolladoramente en la nominación por el Partido Republicano -sin pertenecer a éste- sacando del juego a candidatos afines y pertenecientes a las élites estadounidenses como Jef Bush y otros. Desde ese momento y más en la campaña, se caracterizó por poner en el centro el ataque a la emigración, su misoginia y la islamofobia, el proteccionismo económico ante China y México, en menor medida hacia Alemania, anunciando además que la OTÁN era demasiado costosa y que los socios de Estados Unidos deberían pagar los costos de las operaciones militares y bases en el extranjero; y paradójicamente anunciando un entendimiento con Vladimir Putin sobre todo en el combate al yihadismo islámico.

La toma de posesión el 20 de enero de parte de Trump y su vicepresidente Mike Pence fue recibida por la mayoría del pueblo estadounidense con repudio, realizando grandes manifestaciones el día de la toma y al día siguiente, donde varias organizaciones de mujeres convocaron a masivas concentraciones, que según las organizadoras se sumaron más de un millón de personas, mientras que las concentraciones de Trump llegaron a lo sumo, a 500 mil en todo el país.

El fenómeno Trump

La crisis capitalista mundial iniciada en 2007-2008, con la quiebra de la mega corporación financiera Lehman Brothers, provocó tanto en el plano económico

como en el político, una severa crisis disparando los índices de desempleo en los países imperialistas, la caída del crecimiento económico y los índices de productividad, entre otros aspectos; poniendo en tela de juicio proyectos como la Unión Europea y en sí, todo el proyecto de liberalización capitalista promovido por la oligarquía financiera mundial, sobre todo gringa, posterior a la Segunda Guerra Mundial.



Esta crítica a los efectos de la liberalización con tónica neoliberal implementada en el último cuarto del siglo pasado, ha catapultado a formaciones de extrema derecha en Europa, que tras el triunfo del Brexit, agarraron mayor fuerza con el triunfo de Trump; a la espera estaría el Frente Nacional de Francia y expresiones euroescépticas en Italia. Con el nuevo presidente gringo, toda la chusma fascista y racista de ese país, esta envalentonada y las agresiones contra personas no blancas están a la orden del día. Sin embargo, el triunfo de Trump no contó solo con el voto de la extrema derecha, sino de sectores de la clase obrera blanca que han sido afectados por la internacionalización de los procesos productivos, perdiendo sus empleos, y votaron por sus demagógicas promesas.

Muchos de estos votantes, procedentes del denominado Cinturón del Óxido en los estados de los grandes lagos, la mayoría votantes demócratas, concibieron el voto por el magnate como una forma de repudio al Partido Demócrata. Y es que la promesa de Trump consiste en regresar los empleos industriales a Estados Unidos, de ahí sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y chinas, algunas de capital estadounidense. Sin embargo, esta propuesta es un retroceso en la rueda de la historia, porque la denominada internacionalización no solo es producto de la búsqueda de bajos costos salariales para los empresarios, sino de la automatización de los procesos productivos. Así como el hecho de que las trasnacionales deslocalizan la producción en cadenas diseminadas en diversas partes del mundo.

Trump, con un discurso contra las élites de Wall Street, es decir la facción oligárquica del capital financiero, cautivó algunos sectores de los votantes, así como con su promesa de generar condiciones para que la burguesía invierta en infraestructura, vía exoneraciones fiscales y créditos. Pero la conformación del gabinete (al cual en la democracia imperial una comisión bicameral del Congreso le da el visto bueno), sobresalen empresarios o gerentes de trasnacionales. Comenzando por el titular del Departamento de Estado Rex Tillerson ex Ceo de Exxon Mobil, cercano a Putin y socio con la estatal petrolera rusa en inversiones en el Ártico; o Steven Muchin otro ex Ceo de Goldman Sacha, entre otros. Algunos analistas



consideran esto como similar a lo que realizó Reagan no sin efectos perniciosos para la economía, en lo que se refiere a la inversión en armamento y aranceles a importaciones japonesas.

¿Hacia un bonapartismo?

Sin embargo, son los cambios en materia de defensa y seguridad los que han provocado reacciones en círculos progresistas y de izquierda. En la cartera de defensa fue nombrado James “perro loco” Mattis, un militar en activo que se lo nombra infringiendo cierta tradición de no nombrarlos. En la Secretaría de Seguridad Interior a Michael Flynn encargado de operaciones de seguridad de las tropas invasoras en Irak y Afganistán, caracterizado por su “islamofobia”, al igual que el nuevo director de la CIA Mike Pompeo. A cargo del poderosísimo Consejo Nacional de Seguridad estará John Kelly, ex comandante del Comando Sur y considerado más cercano a la línea impulsada por Obama, de presionar vía el tema derechos humanos y lucha contra la corrupción. No por nada éste y Tillerson, anunciaron que continuarán el Plan Alianza Para la Prosperidad y los acompañamientos a la CICIG, la MACCIH, en Guatemala y Honduras respectivamente, y la cooperación con el gobierno del efemelenista en El Salvador.

En ese sentido Trump reformó los mecanismos en mención, la reforma más importante en 69 años, tanto el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad de la Patria, eran articulados por la Casa Blanca, con el respaldo del Estado Mayor Conjunto y la CIA. Ahora tanto el Estado Mayor Conjunto como en un inicio la CIA estarían solo si el presidente lo solicita; sin embargo,

sectores de las élites lo rechazaron y Trump autorizó que el director de la CIA estuviera permanentemente. Esto en un horizonte que se presume de mayor bonapartismo de parte de Trump, para controlar lo que se considera, la columna vertebral del Deep State.

Sin embargo, esta tendencia aun es imprevisible; en las primeras medidas del gobierno de Trump, además de ordenar el inicio de la construcción del muro,

decretó que se vede durante un tiempo el ingreso de ciudadanos de varios países musulmanes, entre ellos Siria, Irak, Irán, Libia, Sudan, etc.; medida que generó protestas en aeropuertos y en otras partes, así como cuestionamientos de estos gobiernos. De por sí con Irán la situación había empeorado pues Trump anunció sanciones a este país por las pruebas de misiles de mediano alcance realizadas por la teocracia chií, aunque el acuerdo nuclear no se vaya a detener. Sin embargo, esta medida migratoria fue declarada inconstitucional por un juez federal del Estado de Washington y ratificada por una Corte de Apelaciones, poniendo en evidencia que en materia migratoria como en otras, tal como le pasó a Obama pero desde otro ángulo, existe un conflictos sobre jurisdiccionalidad entre la federación y los estados.

Contra México y la región

Pese a atacar a China -que se muestra ahora paladín del libre comercio-, de haber dado la orden de no proseguir las negociaciones del Acuerdo Transpacífico y que lo mas probable se repita con el Acuerdo Transatlántico, este energúmeno se enfila contra el pueblo mexicano y



todo el pueblo latinoamericano que por necesidad económica tiene que emigrar hacia el norte.

Con el cacareado Muro, que de hecho fue iniciado en el gobierno de Clinton, que Bush hijo y Obama continuaron con la militarización de la frontera sur, Trump se propone construir un muro físico, que según algunos analistas mínimo costaría US\$ 20 mil millones, además de los daños ecológicos y el costo humano para los

compatriotas que pretenden irse para allá. Así, ante la negativa del gobierno mexicano de pagar este muro, éste se costearía con el aumento de los aranceles a las exportaciones mexicanas, además de anunciar la renegociación del Nafta.

Esto ha provocado temor en la burguesía mexicana, sobre todo la que esta interconectada a las inversiones gringas en los estados fronterizos. Ésta y la casta política de ese país y hasta partidos de izquierda como Morena, se llenan la boca de “unidad nacional”; justo ahora que el gobierno de Peña Nieto se encuentra desprestigiado, el PAN y el PRI anuncian un pacto para garantizar las elecciones en 2018.

Esto ante las movilizaciones constantes contra el gasolinazo producto de la apertura petrolera que afecta al monopolio estatal Pemex, en un país exportador de petróleo donde la refinación y elaboración de combustibles ha decaído, importando de afuera. Por tanto, la unidad con un gobierno espurio, responsable del desaparecimiento de los estudiantes de Ayotzinapa, que además hace el trabajo sucio de los gringos contra los migrantes centroamericanos y de otras regiones que buscan moverse para el norte, es inconcebible

La renegociación del Nafta puede implicar mayores beneficios para la facción burguesa que se acuerpa con Trump, sobre los intereses de la burguesía mexicana. Después de este acuerdo de libre comercio estaría la revisión del CAFTA con Centroamérica, pero sobre todo lo que viene es un ataque mayor, contra la clase trabajadora de la región, obstaculizando el deseo de migrar. Manteniendo la política del garrote y la zanahoria, vía traspaso de recursos a las policías y los ejércitos, y a programas de prevención del crimen y de desarrollo social con ONGS al servicio del imperio. En todo esto los gobiernos de Centroamérica -de izquierda y de derecha- tal como el de México, esperan que Trump suavice tales medidas y que sigan llegando las migajas del imperialismo. ■

85 AÑOS DESPUÉS:

EL LEVANTAMIENTO DE 1932

Por Erik Ching

Publicado en la edición No 12 de la Revista "1857".

A finales de enero de 1932, un suceso extraordinario en El Salvador dejó una profunda cicatriz en la mente de la nación. En esa fecha, unos cuantos miles de campesinos en rebeldía se levantaron y atacaron aproximadamente una docena de municipalidades en el occidente salvadoreño, asesinando entre 50 y 100 personas y dañando muchas propiedades. La rebelión tomó por sorpresa al gobierno salvadoreño, al cual solo le tomó algunos días para reagrupar al ejército y lanzar un contraataque. El ejército tenía mejor movilidad y estaba mejor equipado, por ello, cuando lanzaron la ofensiva y rodearon a los rebeldes, volvieron rápidamente a tomar control sobre la región.

La rebelión fue un evento significativo, la violencia rural y la movilización campesina han tenido un lugar importante en la historia de El Salvador, por lo que la rebelión en sí no fue un momento decisivo. Más bien fue lo que sucedió posteriormente. Después de que el gobierno aplastó la rebelión, se definió un precedente que configuró todo un discurso que haría infames a los hechos del 32. Bajo el liderazgo del Presidente (y General) Maximiliano Hernández Martínez, el gobierno salvadoreño se vengó de toda la zona occidental. Las unidades armadas y grupos paramilitares asesinaron a miles de campesinos, quienes tenían poca o ninguna relación en la rebelión. Fue un horrible y trágico episodio, uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina. El asesinato en masa consolidó a los militares en el gobierno, lo cual resultó en 50 años de dictadura militar, el más largo

capítulo de ininterrumpido control militar en la historia moderna de Latinoamérica. Los eventos de 1932 tuvieron profundas consecuencias de larga duración. Es por



esta razón que el poeta y activista Roque Dalton describe a los salvadoreños como "nacidos medio muertos en 1932", porque tuvieron que enfrentarse con el hecho de que la historia moderna de la nación se había criado en sangre.

La rebelión comenzó a la media noche del 22/23 de enero, y se centró en seis localidades geográficas: 1) Tacuba; 2) Ahuachapán; 3) Juayúa/Salcoatitán/Nahuizalco; 4) Sonsonate/ Sonzacate; 5) Izalco y 6) Colón.

Aunque hubo algunos ataques dispersos, estos constituyeron los principales sitios de actividad. El típico

patrón de ataque consistía en reunir decenas o cientos de campesinos en las afueras de los pueblos y tomar rápidamente los puestos militares y las oficinas del telégrafo, para evitar que enviaran una advertencia al principal puesto militar en la capital del departamento. Los rebeldes estaban pobremente armados, pero tenían la ventaja del factor sorpresa y de número, por lo que inicialmente tuvieron algunos éxitos.

Los primeros ataques tuvieron lugar en Juayúa, Izalco y Salcoatitán. Los reportes de testigos son raros, pero uno proveniente de un misionero bautista norteamericano en Juayúa, llamado Roy McNaught, describe haber sido despertado en el medio de la noche por fuertes golpes. Él vio en su ventana aproximadamente 80 hombres atacando la oficina del telégrafo. También atacaron la estación de policía, matando a un oficial e hiriendo a otro. Además, se lanzaron sobre la casa de Emilio Radaelli, a quien McNaught describe como "el hombre más rico del pueblo". Los rebeldes dispararon a Radaelli e hirieron a su esposa e hijo, quemaron su casa, saquearon algunos negocios y dañaron otras casas de la elite. De acuerdo con reportes tardíos del periodista salvadoreño Joaquín Méndez, los rebeldes causaron daños valorados en más de 300,000 colones (\$125,000 dólares) solo en Juayúa, esta cifra puede ser el equivalente aproximadamente de un millón de dólares en moneda actual. La experiencia de Juayúa tipificó los ataques en las otras municipalidades. Los rebeldes focalizaron su ira en propiedades e individuos de la elite, y una vez lograron sus objetivos, se limitaron a saquear y a invitar vecinos pobres a unirse.

El cercano pueblo de Salcoatitán fue atacado aproximadamente al mismo tiempo que Juayúa, lo que quiere decir

que las fuerzas rebeldes en esa región se dividieron en dos para atacar ambos pueblos simultáneamente. Ni los oficiales del telégrafo en Juayúa o Salcoatitán fueron capaces de alertar al puesto militar en Sonsonate. Pero el de Izalco, pudo enviar un mensaje antes de sucumbir a los rebeldes. Temprano en la mañana del 23, el comandante del puesto militar de Sonsonate respondió organizando una fuerza expedicionaria que fue a apoyar a Izalco; pero estos se encontraron con un fuerte contingente de rebeldes cerca de Sonzacate. Estos habían finalizado el ataque al pueblo y se estaban preparando para marchar a Sonsonate. Los expedicionarios se retiraron al puesto con los rebeldes tras ellos. Aparentemente, las puertas principales del puesto estuvieron abiertas y algunos rebeldes entraron en medio de luchas mano a mano antes que los soldados los vencieran y cerraran las puertas. Entonces repelieron a los rebeldes con armas de fuego, desde lugares seguros dentro de los muros del puesto. Luego abandonaron el ataque y dejaron Sonsonate después de arremeter contra la estación de policía y saquear algunas propiedades.

Al mismo tiempo del ataque al cuartel de Sonsonate, otro grupo acometió en contra del cuartel en Ahuachapán. También fue repelida por constantes disparos con armas de fuego. A pesar de que los ataques en los dos puestos fallaron, esto permitió que la rebelión durara más de lo que en otro caso pudo ser. Los mandos dudaron en enviar sus tropas fuera de los puestos mientras no estuvieran seguros que la amenaza inmediata había pasado. Por lo tanto, el contraataque militar no empezó sino hasta el 24 de enero, en lugar de la mañana del 23. Los tres ataques finales ocurrieron todos el 23 de enero, en Tacuba y Colón por la mañana, y en Nahuizalco por la tarde.

La rebelión fue aplastada aproximadamente en 24 horas, entre la tarde del 24 al 25 de enero. Las tropas de Sonsonate retomaron Izalco y Nahuizalco en la tarde del 24 y durante la mañana

siguiente lograron controlar Salcoatitán y Juayúa. Un grupo expedicionario desde Ahuachapán llegó a Tacuba en la misma tarde y llevaron a los rebeldes ahí. Así que en la tarde del 25 de enero, todos los pueblos estaban en manos del gobierno.

Tan pronto como los informes de la rebelión llegaron a San Salvador, el gobierno nacional comenzó a organizar fuertes columnas de tropas provenientes de los departamentos del centro y del oriente. Solo tomó unos días para juntar a todas las tropas y colocarlas en el tren, por lo que no llegaron a Sonsonate durante la tarde del 25, momento en que las tropas ya habían recuperado el control en la región. Pero eso solo fue el comienzo de la matanza. Las unidades militares se desplegaron por el campo matando



campesinos indiscriminadamente. Una de las tácticas militares al llegar a un pueblo era llamar a todos los hombres adultos a que se reportaran a la plaza central para recibir un salvoconducto y evitar ser confundido con un rebelde. Mientras se reunían, todos los hombres eran ametrallados en masa. Bandos paramilitares de los pueblos locales que fueron reunidos, recorrieron el campo buscando a cualquiera que mereciera morir.

No existe manera de determinar el número de personas muertas. Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto. Todo lo que se tienen son varias descripciones de testigos y algunas fotografías de los cadáveres tirados en las calles y movilizados en carretas para ser colocados en fosas comunes.

Certeramente se puede decir que varios miles de personas fueron asesinados.

Curiosamente, tan pronto como las masacres comenzaron, estas terminaron rápidamente, al menos de parte del gobierno. Asimismo, bandas de paramilitares locales continuaron una exacta retribución en la población rural por semanas, incluso meses; pero cerca de diez días después que comenzara la masacre por parte del ejército, el gobierno ordenó que finalizara la represión y el regreso de las tropas, dejando aproximadamente el mismo número de soldados que había en la región antes de la sublevación. Los oficiales del gobierno unos meses después expusieron sus razonamientos, entre ellos el presidente Martínez, el cual en un discurso ante la Asamblea Nacional el 4 de febrero, explicó que querían un campo estable que permitiera la productividad económica y entendieron que los campesinos muertos no eran buenos trabajadores. También creyeron que las condiciones de explotación en el campo causan rebeliones, por ello argumentó que podrían ser necesarias algunas reformas para prevenir futuras rebeliones. En última instancia, el gobierno de

Martínez hizo muy poco para llevar a cabo dichas reformas, pero estableció un patrón básico que los posteriores regímenes militares seguirían: reprimir rebeliones campesinas, pero promoviendo la idea de reformas para prevenirlas.

Las causas de la rebelión de 1932 pueden ser divididas en explicaciones de corto y largo plazo. Las explicaciones de largo plazo pueden ser resumidas en dos palabras: indígenas y café. Las tierras altas del occidente de El Salvador fueron el centro de la economía cafetalera, y el café fue el más importante cultivo de la época. El café contabilizó el 90 % de las ganancias producto de la exportación antes de la Gran Depresión de 1929. El occidente salvadoreño también era residencia de la gran mayoría de los indígenas salvadoreños, de hecho, muchas de las

plantaciones de café estaban localizadas en tierras que anteriormente pertenecieron a las comunidades indígenas bajo la forma de tenencia de tierra comunal. La mayoría de las municipalidades que fueron atacadas durante la rebelión tenían mayoritariamente población indígena, como Nahuizalco, Izalco, Juayúa y Tacuba. Se sabe que muchos de los rebeldes eran indígenas, aunque también participaron muchos campesinos ladinos. Desde finales del siglo XIX, las tierras altas del occidente de El Salvador y sus pueblos indígenas, habían sido sometidos a intensas presiones de transformación. Los indígenas perdieron sus tierras comunales por medio de decretos gubernamentales en la década de 1880, aunque, incluso recibieron parte de sus tierras bajo la forma de propiedad privada, la mayoría de las principales tierras para café pasó a ser propiedad de ladinos especuladores y de hacendados capitalistas. Hacia 1920, muchos campesinos del occidente salvadoreño, no tenían suficiente tierra para subsistir, y muchos de ellos se convirtieron en dependientes a tiempo completo de los salarios en las plantaciones de café.

Fue una situación peligrosa que se exacerbó luego que se desencadenara a corto plazo la Gran Depresión de 1929. Los consumidores norteamericanos y europeos del café salvadoreño compraron menos y los precios cayeron. Los productores no tuvieron otra opción que cortar los salarios y la producción. Así que en 1930 y 1931, la población rural del occidente de El Salvador estaba en una situación de crisis aguda, y comenzaron a movilizarse en respuesta a ello. Existe un gran debate en cuanto a si el Partido Comunista Salvadoreño y otras organizaciones hermanas, el Socorro Rojo Internacional o la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, tuvieron responsabilidad en la organización del levantamiento. No hay duda de que algunos miembros de estas organizaciones querían desesperadamente organizar a los trabajadores del café y liderar una insurrección. Aunque varios de sus miembros fueron más cautelosos

y menos optimistas, creían que su nueva organización, en gran medida de base urbana, tendría dificultades con el tiempo para organizar un evento de tal dimensión. Existen muchas razones para considerar que el foco principal de la insurrección estaba ubicado en las comunidades campesinas, en vez de estas organizaciones formales. De cualquier forma, a finales de 1931 el occidente se encontraba en un estado de gran agitación, con huelgas regulares estallando en las plantaciones de café, y muchos planes circulaban en secreto para lanzar una rebelión, lo que



eventualmente ocurrió el 22 y 23 de enero.

Las razones de la intensa represión por parte del gobierno, pueden ser mejor resumidas en las muchas y diversas presiones que tenía el gobierno de Martínez. Era un nuevo gobierno que llegó al poder mediante el golpe de estado de diciembre de 1931 Arturo Araujo, quien fue electo democráticamente. Los Estados Unidos se reusaron a reconocerlo diplomáticamente, porque llegó al poder por medios no democráticos. Y también, por supuesto, el gobierno se enfrentó con una profunda crisis económica y una creciente situación de organización de masas. Tan pronto la rebelión estalló, los Estados Unidos y la Marina Británica

aparecieron en las costas y declararon que podían desembarcar, el régimen de Martínez lo interpretó como una amenaza a la soberanía. Al parecer el gobierno reaccionó con dureza, para no dejar dudas en la mente de cualquier persona, que todo estaba bajo control y que podía prometer orden y estabilidad. Fue una decisión política, trágica y homicida.

Los eventos de 1932 tuvieron un profundo y perdurable impacto en El Salvador. Sin lugar a dudas, establecieron un precedente en el uso del terror para reprimir a las masas que se movilizaban en el campo, algo que se repitió a menudo en las siguientes décadas. También consolidaron las diferencias de interpretación política de la izquierda y la derecha en El Salvador. Aunque el término "comunista" fue usado para referirse libremente a los rebeldes, es bastante claro que la mayoría de los involucrados entendieron que los eventos estaban profundamente arraigados en la historia de la tierra y las relaciones laborales en el Occidente de El Salvador. Los terratenientes creían ser los poseedores de la justicia, la riqueza y el poder y definían a los campesinos rebeldes como bárbaros ingratos por cuestionar el sistema. A menudo se describen las acciones de los rebeldes con un lenguaje exagerado, acusándolos de matar a miles de personas, en lugar de entre cincuenta o cien que mataron, y luego se pasa por alto, convenientemente, la campaña criminal por parte del ejército que los aseguraba en el poder local. En cuanto a la izquierda, el desastroso resultado de la rebelión hizo que sus miembros no se atrevieran a asumir la responsabilidad de la rebelión, o incluso lo definen como una buena idea. Aunque sin duda, focalizaron su atención en la masacre provocada por el gobierno, como una manera de exponer las profundas diferencias políticas y económicas de El Salvador. Los sucesos de 1932 fueron enmarcados dentro de los debates que degenerarían en la guerra civil de la década de 1980. ■



ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA SE LEVANTAN ANTE LOS PLANES NEFASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNAH

Por Horacio Zambrano Raudales

La crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) parece profundizarse más, al tiempo que, amedrentados por los acuerdos del 28 de julio, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) no da respuesta a la progresiva problemática de la Educación Superior en Honduras. La Cuarta Reforma Universitaria se introduce a partir de 2004 la UNAH como una solución efectiva a las dinámicas neoliberales que ha permeado los diseños curriculares, modelos educativos y estructuras institucionales en general, de las universidades latinoamericanas desde la década de 1980.

En este contexto, la tecnificación, la internacionalización y la descomposición de la participación estudiantil se vuelven constantes de los procesos orientados a la supresión, por ejemplo, de las carreras de humanidades, artes o cualquier otra que no “responda” a las necesidades de procedimientos y regulaciones institucionales hegemónicas de los sistemas de Educación a nivel superior y medio; que en el caso hondureño se refleja en la Ley de Educación Superior y en la Ley Fundamental de Educación, respectivamente.

Esperar el cierre de la carrera de pedagogía o luchar por el ingreso pleno de los nuevos compañeros

Ayer 6 de febrero se llevó a cabo una asamblea estudiantil de parte de los compañeros de pedagogía de la UNAH. En esta asamblea se comunicó el plan de

parte de la Vicerrectoría, que consiste en el cierre de la carrera, la destrucción de las orientaciones y el cese de las actividades académicas, por creer desfasado el plan de estudios de esta carrera.

La asamblea terminó en un descontento generalizado de los estudiantes, y un pequeño intento de toma del edificio en donde están varias de las carreras de Humanidades. Al final la voluntad y presión de los compañeros hizo ceder a las autoridades de llevar a cabo esta orden expresa de vicerrectoría.

Instamos a los compañeros de pedagogía a pelear por el derecho de otros que desean ingresar a esta importante carrera. Quizás el pronto retiro de las autoridades no responde a la exigencia de la mayoría de los compañeros en contra de estos planes, sino más bien al clima de tensión que devino luego de la firma de los acuerdos, donde las dos partes –el MEU y autoridades– firmaron el cumplimiento de esta figura legal.

como por ejemplo estar cumpliendo los acuerdos; ellos no quieren dar motivos que enciendan las luchas del Movimiento estudiantil, y además no quieren un ambiente de hostilidad a pocos meses de la elección de la Junta de Dirección Universitaria.

Estos problemas de transformar las licenciaturas en carreras técnicas, no solo se está comenzando a aplicar en la UNAH, sino también en otras universidades como la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en donde también se está aplicando el mismo plan de reducir las licenciaturas a simples carreras técnicas, degradando a los maestros. En este caso, parece que hay una coordinación entre la UNAH y la UPNFM, pues al quitar las orientaciones en Pedagogía de la UNAH pretenden trasladar a estos alumnos a la UPNFM, para que se gradúen como técnicos allá. El objetivo es claro, pretende reducir la población estudiantil de la carrera de Pedagogía, y con ello que los estudiantes paguen los efectos de la crisis de la educación superior.

Por ello, llamamos a la solidaridad estudiantil con los estudiantes de Pedagogía de la UNAH. La lucha apenas está comenzando y vamos a necesitar del apoyo del estudiantado de todas las universidades, por eso llamamos a la coordinación entre los estudiantes de la UNAH, UPNFM y la UNAG, para formar una coordinadora estudiantil a nivel nacional, que nos permita responder de manera unificada ante los ataques de la burocracia universitaria.



Concretar las acciones de cierre de la carrera de pedagogía significaría el regreso a las protestas en la UNAH, y esto no concordaría con la imagen de la institución que están promocionando las autoridades en cadenas televisivas:

ataques de la burocracia universitaria. ■



EL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA, EL MAL MENOR

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Después que Daniel Ortega dio un manotazo mortal a la oposición parlamentaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que presentaría un informe sobre el sistema electoral en Nicaragua. Este anuncio creó expectativas entre los partidos de oposición, creyendo que a última hora el régimen bonapartista de Ortega haría algunas concesiones, y permitiría la participación de los partidos y fuerzas políticas excluidas, en el proceso electoral de noviembre de 2016. Pero no fue así.

Daniel Ortega necesitaba apurar el trago amargo de un proceso electoral cuestionado, pero que al mismo tiempo le permitía colocar a su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia de la República. Por ello, con el olfato político que le caracteriza, inició en octubre del 2016 un diálogo político de alto nivel con Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La maniobra funcionó perfectamente. La OEA nunca dio a conocer el publicitado informe sobre el sistema electoral, y se enfrascó en un diálogo que prometía reformas en el futuro, dando por un hecho la realización de las elecciones tal a como las había planificado el régimen de Daniel Ortega. Se acordó instalar una “Mesa de conversación e intercambio constructivo” a menos de un mes de la realización de las elecciones. Y para remate, una delegación de alto nivel de la OEA visitó el país, y con ello a las cuestionadas elecciones de noviembre del 2016 le fueron aplicadas los santos oleos.

La visita de Luis Almagro

A inicios de diciembre del 2016, después de algunas vacilaciones, Luis Almagro, secretario general de la OEA, visitó Managua por espacio de dos días, reuniéndose con el gobierno, la iglesia y la

oposición burguesa.

Nuevamente, Daniel Ortega impuso los temas de agenda: “Le hemos dicho al secretario general de la OEA que estamos en la mejor disposición de que se pueda mantener este diálogo, este intercambio, este acompañamiento, tomando en cuenta que este próximo año tenemos elecciones municipales (...) Los hemos



invitado para que puedan llevar a cabo un acompañamiento, no el propio día de las elecciones, sino para estar visitando nuestro país, intercambiando con las fuerzas políticas que están dispuestas a participar, también con las autoridades electorales y con todas aquellas personas con las que desee intercambiar” (El Nuevo Diario, 03/12/2016).

Con ello, se estaba sepultando la polémica sobre la validez de las elecciones de noviembre del 2016. La oposición burguesa se halaba los cabellos. Almagro con sus declaraciones confirmó que, en relación a Nicaragua, el rol era de ayudar a reformar el régimen bonapartista, no para derrocarlo.

Luis Almagro insistió que “la Organización de Estados Americanos está para hacer un papel constructivo, hacer aportes que signifiquen apoyar a Nicaragua en los pasos importantes que ya ha dado en materia de seguridad, educación y energía”. (El Nuevo Diario, 03/12/2016).

Esto último es un asunto muy importante. Tanto el gobierno de Estados Unidos, como su títere, la OEA, reconocen las políticas de Daniel Ortega

en “seguridad, educación y energía”, les encanta la estabilidad macroeconómica y la contribución del sandinismo en la estabilidad política de Nicaragua y Centroamérica, y por ello sus planes inmediatos se limitan a reformar el sistema electoral, garantizando algún grado de transparencia y de participación de los partidos de oposición ¡Nada más!

La marcha unificada de la oposición burguesa

Para demostrar fuerza ante la visita de Luis Almagro, los diferentes grupos de la oposición burguesa, con la excepción de los partidos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre de 2016, convocaron a una marcha unificada de todas las fuerzas de la oposición, alentados por el alto índice de abstención electoral observada en esos comicios.

Para garantizar una asistencia masiva, los partidos de la oposición burguesa se camuflaron en la marcha de los campesinos que, con algún grado de justicia, temen a las expropiaciones que vendrían si el proyecto del Canal Interoceánico llegase a concretarse. En realidad, fue una marcha campesina, con los activistas de derecha dentro. Para restarle convocatoria, el régimen de Daniel Ortega boicoteó abiertamente la marcha, creando tranques policiales en toda la carretera, destruyendo puentes, logrando una mala asistencia en Managua, cuyos dirigentes lograron reunirse con Almagro. En esta ocasión, el gobierno no utilizó a sus partidarios como fuerza de choque, sino que la represión fue institucional, a partir de las fuerzas de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

La reunión de los políticos con Almagro

Luis Almagro logró reunir a todos los políticos de oposición en una sola sala, escuchó sus críticas, tomó nota y declaró a los periodistas que “es importante ajustar algunos temas que tienen que ver



con el funcionamiento del sistema político (...)."

Mientras Almagro hablaba de reformas, un sector de la oposición agrupado en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) que agrupa al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y algunos grupos liberales minoritarios, exigían la anulación de las elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso electoral, aprovechando que en noviembre del 2017 se realizarán las elecciones municipales. También exigieron a la OEA la invocación de la Carta Democrática, para sancionar al gobierno de Daniel Ortega

La Iglesia crítica, pero está paralizada

En relación a la Iglesia Católica, sigue clamando por que se cumplan los puntos incluidos en la Carta Pastoral del 21 de Mayo del 2014, pero por primera vez se muestra dividida y por ello guarda silencio. Al parecer los obispos no logran ponerse de acuerdo. Hay sectores de extrema derecha como el Obispo Silvio Báez que constantemente fustiga al gobierno de Daniel Ortega, pero también otros que simpatizan con el gobierno, como es el caso de Monseñor René Sándigo, obispo del departamento de Chontales y Río San Juan, de dónde provino el grueso de la marcha campesina, que han criticado duramente al "Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que ha estado presente ahí manipulando a nuestros campesinos y organizaciones no gubernamentales, que cogen a nuestros campesinos por aquellas demandas, tal vez justas que ellos hacen, pues los lanzan como punta de lanza" (La Prensa, 03/12/2016).

El informe conjunto de la OEA y el gobierno sandinista

Después de tres meses de negociaciones secretas, el esperado informe de la OEA fue dado a conocer el pasado 20 de enero, cayendo como un balde de agua helada en la madrugada.

En sus partes medulares, el Informe Conjunto concluyó en una hoja de ruta que se resume así: "(...) El Estado de Nicaragua continuará fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas; elecciones incluyentes, limpias y competitivas. Estos estándares que

describen el grado de democratización de una elección, incluyen: el voto universal y equitativo; la inscripción o registro civil; el registro electoral; el acceso al centro de votación; la emisión del voto; la integridad de las preferencias del votante; el registro exacto de las preferencias del votante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad; la igualdad de oportunidades tales como el financiamiento a los partidos políticos; el derecho a la libertad de prensa e información; la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento; la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos; y la accesibilidad de los resultados electorales. (...) No más tarde del 28 de febrero de 2017 la Delegación de Nicaragua y la Secretaría General ele la OEA firmarán un Memorandum de Entendimiento que incluirá los aspectos técnicos del trabajo conjunto a llevar a cabo. El mismo establecerá un plazo de 3 (tres) años para desarrollar los trabajos y detallará -en consonancia con el presente documento- las tareas específicas a llevar a cabo en materia de i) seguimiento de las elecciones municipales de noviembre de 2017, ii) continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente, iii) búsqueda de mecanismos y normativas que fortalezcan jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, con determinación de la actuación y procedimientos de cada uno de los Poderes del Estado de Nicaragua. iv) apoyo técnico de la OEA en el proceso de depuración del padrón electoral de Nicaragua".

Borrón y cuenta nueva

Los temores de la oposición burguesa se confirmaron. El gobierno sandinista había legitimado la última reelección presidencial de Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo como vicepresidenta, con la promesa que habrían reformas al régimen político. La oposición burguesa criticó el Informe Conjunto a pesar que es el mismo plan de reformas que ellos han propuesto, con la salvedad que la negociación se produjo con la OEA y no con los debilitados partidos criollos.

Fabio Gadea, ex candidato presidencial de la oposición, criticó ásperamente el

Informe Conjunto: "(Que Almagro) no diga que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad porque aquí nadie está fortaleciendo la institucionalidad, hay que crearla porque está perdida, pero (Almagro) tiene miedo decirlo (...) Que van a tratar de favorecer los mecanismos para el cumplimiento de la Carta Democrática, si todos esos mecanismos están rotos porque no hay elecciones libres, porque no hay observación internacional; no hay padrón electoral. Eso es ridículo, porque, además, no me explico por qué Almagro no tomó en cuenta los argumentos que presentaron los amplios sectores, si parece haber tomado en cuenta lo que dijo el COSEP, el grupo de diputados que están allí, lo que le dijeron los partiditos zancudos".

Criticas similares surgieron de los líderes del FAD, mientras Eduardo Montealegre, desde su aparente retiro, mantiene silencio mientras su agrupación, ahora denominada Ciudadanos por la Libertad (CxL) avanza aceleradamente en los trámites para la obtención de la personalidad jurídica como partido independiente de los sellos tradicionales del liberalismo.

Mucho cuidado con Mr. Trump

El sandinismo parece haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos, a través de la OEA, que permite la sobrevivencia del régimen bonapartista, y que garantiza la continuidad en el poder de la familia Ortega-Murillo, a cambio de algunas reformas democráticas, que el sandinismo parece dispuesto a ceder.

En relación a la administración Trump, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido un cauteloso silencio, enviando constantes señales de buen desempeño en la lucha contra el narcotráfico, estabilidad económica y política, y en materia de seguridad. Todo con el objetivo de evitar una nueva versión de la NicaAct, una ley norteamericana de efecto extraterritorial que amenaza la frágil economía.

En estas circunstancias, el gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en el fiel guardián del capitalismo neoliberal, en el mal menor, es cuestión solo de enderezarlo. ■



ALGUNAS PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (IVM)

Por José René Tamariz

En los dos últimos meses se ha escrito en la prensa una gran cantidad de artículo sobre la problemática que enfrenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), producto del estudio actuarial que realizó la escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este régimen de pensiones es el más importante del país, ya que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores. Según ese estudio actuarial las reservas de dicho fondo, cercanas a dos billones de colones, se agotaría entre los años 2027-2034, es decir, dentro de unos 10 o 14 años, lo cual llevaría a este sistema de pensiones a la crisis total y, por ende, a una grave crisis social de incalculables dimensiones.

Algunos Datos Sobre el IVM

Al IVM se encuentran afiliados 1.4 millones de trabajadores. Actualmente ese régimen de pensiones cuenta con 225.000 pensionados. La cotización total es de 9.16%, porcentaje del cual corresponde el 1,24% al Estado, 2,84% a los trabajadores y el 5,08% a los patronos. La cantidad del monto de la pensión oscila entre el 43% y 52.5% del promedio de los últimos 240 salarios más el 0.0833% por cada una de las cotizaciones adicionales. La edad actual para pensionarse es de 65 años.

Las Reformas Propuestas por el Estudio Actuarial de la UCR

El estudio realizado por la escuela de matemática de la UCR plantea cuatro posibles escenarios para la jubilación en el régimen IVM de la CCSS. Solamente en el primer escenario la edad para retirarse queda en los 65 años con 25 años cotizados o 300 cuotas y el monto de la

pensión quedaría reducida al 40% por los primeros 20 años. En los tres siguientes escenarios el retiro se realizaría entre los 65 y 70 años. En estos últimos escenarios, la mitad de trabajadores se retirarían a los 65 años, mientras que las personas que tengan entre 15 y 25 años de cotizaciones se retirarían a los 70 años.

Lo anterior quiere decir que el 50% de los cotizantes al IVM se pensionarían a los 70 años. Como se puede observar ese tipo de medida son salvajes. Al final esas reformas se podrían resumir en los siguientes puntos: 1) aumentar la edad para pensionarse de 65 a 70 años. 2) incrementar la cotización tripartita, obrero-patronal-Estado, del 9.16%

fuerte polémica y diversas alternativas de solución al deterioro de ese sistema de pensiones y de su eventual crisis. Ciertos neoliberales han planteado un conjunto de posiciones delirantes y desquiciadas, tales como, que las pensiones del IVM son una “estafa” porque, supuestamente, utiliza un esquema Ponzi, lo cual es falso, ya que ese es un sistema de fraude financiero; algunos señalan que existe una “quiebra” del régimen de IVM lo que tampoco es cierto, aunque existe una situación delicada del régimen sino se toman medidas adecuadas y correctivas; otros plantean abiertamente la privatización de las pensiones al estilo Chile y otros países, la cual se ha demostrado con los

hechos que son un fracaso rotundo; mientras que algunos diputados plantean la supervisión por parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) del IVM.

Frente al estudio sobre el IVM realizado por la UCR, la Junta Directiva de la CCSS, para esconder todos sus errores y desastrosa administración de ese

régimen de pensión, decidió, de forma burocrática e inconsulta, elevar la cuota obrera del 2.84% al 3.84% de los salarios del IVM a partir del mes de junio. Esta medida burocrática constituye un zarpazo sobre los bajos salarios de los trabajadores en general los cuales, prácticamente, han sido congelados por más de dos años por pírricos reajustes del gobierno de Solís.

Por otro lado, la Junta Directiva de la CCSS estudia la propuesta del auditor de esa institución, José Arturo Hernández, de trasladar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y del Fondo



actual hasta el 26.4%, porcentaje del cual correspondería el 3.69% al Estado, el 8.72% al trabajador y el 13.99% a los patronos. Esos incrementos de los porcentajes en las cuotas se realizarían de forma escalonada, quedando entre el año 2019 y el año 2060. 3) disminuir el monto de la pensión al 40% del promedio del salario de los trabajadores.

La Discusión Actual Sobre el IVM

Producto del estudio y propuestas de la escuela de matemática de la UCR sobre el régimen IVM se ha abierto una



de Capitalización Laboral (FCL) hacia el régimen de IVM. Este sistema de pensiones complementarias es de tipo privado, tanto por su forma de administración, ya que los fondos de ambos (ROPC y FCL) de 4.7 billones de colones, o sea, más de 8.377.9 millones de dólares al cambio actual son administrados por instituciones financieras sean privadas o públicas, así como porque las cuentas de esas pensiones son individuales. La combinación del régimen básico de pensiones IVM y el régimen complementario constituyen un modelo mixto de pensiones. El régimen complementario de pensiones tiene un conjunto de problemas al cual no nos vamos a referir en el presente artículo. No obstante, la propuesta de los funcionarios de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del régimen complementario de pensiones y del fondo de capitalización al IVM, dada la situación delicada y de eventual crisis del IVM, constituye otra propuesta desquiciada de los malos administradores del IVM y de la CCSS.

Entonces, ¿Cuáles son las Propuestas de Solución del Régimen IVM?

Las propuestas de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR para resolver los problemas que enfrenta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, constituyen medidas salvajes al peor estilo de los neoliberales. Llevar la edad para pensionarse de 65 a 70 años significaría que miles de personas no puedan disfrutar de sus pensiones, porque se morirían trabajando, mientras que muchos miles solamente podrían disfrutar de algunos años de pensión, considerando que la esperanza de vida promedio en Costa Rica es de 79.4 años.

Por otra parte, aumentar la cotización sobre los salarios del 2.84% hasta el 8.72%, o sea, más del 200% de incremento, constituye un verdadero zarpazo contra los escuálidos salarios de los trabajadores, una verdadera expropiación de los ingresos de la mayoría de la clase trabajadora.

De otro lado, disminuir el monto de las pensiones al 40% sobre los salarios, ya de por sí miserables en el régimen IVM, representaría un empobrecimiento

absoluto y masivo, llegando a la indigencia y pauperización, de todos los pensionados del IVM. Por ende, todas esas salvajes medidas de los actuarios de la UCR deben ser rechazadas de plano y combatidas, para que no sean aplicadas, por el movimiento sindical de forma unitaria.

El aumento de la cotización obrera del uno por ciento decretado, arbitraria e inconsultamente, por los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS, de igual forma debe ser rechazado y echado abajo, vía movilización, por las organizaciones



sindicales. Asimismo, la desquiciada propuesta de los burócratas de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del ROPC y FCL al régimen de pensiones de IVM también deben ser rechazadas y combatida para que ni siquiera sea discutida.

Según han anunciado los funcionarios de la CCSS y del Ministerio de Trabajo en el mes de febrero se iniciará la discusión de las “reformas” del régimen de pensiones de IVM, tomando como base el estudio de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR, así como todas aquellas que lleguen a la CCSS. El movimiento sindical debe discutir y votar una propuesta unificada frente a este grave problema que enfrente el IVM y frente a las propuestas neoliberales y descabelladas, tanto de los actuarios de la UCR, de los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS y otros funcionarios de la misma institución.

Propuestas de solución

De último, planteamos algunas posibles propuestas en la dirección de contribuir a la solución de evitar que se produzca la crisis del régimen de pensiones de IVM hacia los años 2027-2034. Veamos.

1. Exigir el pago de todas las cuotas millonarias adeudadas por el Estado al régimen de pensiones de IVM.
2. Obligar a los empresarios a pagar las cuotas millonarias adeudadas por pensiones al régimen IVM.
3. Imponer la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador que obliga a las empresas públicas (10 empresas e instituciones) a trasladar entre un 5% y 15% de sus utilidades al fondo de pensiones del régimen IVM.
4. Exigir al gobierno incrementalmente su aporte al régimen de pensiones de IVM hasta el 3.69% propuesto por los actuarios de la UCR.
5. Exigir a los patronos el aumento de sus aportes al régimen de pensiones de IVM hasta el 13.99% propuesto por los actuarios de la UCR.
6. Realizar inversiones del fondo de reserva del régimen IVM en obras pública de infraestructuras, no sólo en bonos del Estado.
7. Combatir el desempleo del 10% y la informalidad del 45%, mediante la implementación de un plan de obras públicas que disminuya drásticamente la tasa de desocupación y la informalidad y, de esa forma, aumentar la población cotizante al régimen de pensiones de IVM.
8. Realizar una campaña de afiliación al régimen de pensiones de IVM entre la población informal, así como entre otros sectores para aumentar la cantidad de cotizantes a ese régimen.
9. Reducir los gastos administrativos del régimen de pensiones de IVM y el despilfarro.
10. Que la Junta Directiva de la CCSS esté integrada de forma mayoritaria por el sector de trabajadores que representan la mayoría de cotizantes, así como en cuanto a ingresos de la institución. ■



EL GOBIERNO IMPONE UN TOPE SALARIAL DEL 10%

Por Diego Lynch

La lucha salarial en Nicaragua sigue siendo una historia de nunca acabar. Durante la época de los gobiernos de Derecha (1990-2006) los trabajadores protestaban arduamente y luchaban por incrementos salariales justos. Sin embargo, jamás se dio un incremento salarial apegado a la realidad económica del país o que lograra cubrir las necesidades mínimas de la población.

Durante esa época, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como oposición pretendía ganar votos apoyando dichas luchas, y era nada menos que Gustavo Porras quien trataba de sacar provecho a favor del FSLN, como dirigente sindical del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Cuando el FSLN volvió al poder al ganar las elecciones en el 2006, Porras se acomodó y se olvidó de la defensa de los trabajadores, paso a controlar el llamado "gabinete social" (MINSA: MITRAB e INSS) respondiendo a los intereses de la nueva burguesía, incluso se volvió empresario y desde su posición de diputado y super ministro en las sombras, veló por sus propios intereses, los de las empresas del gobierno y traicionó a los trabajadores.

Negociación es Ilegal

Nuestra Legislación establece una negociación entre el gobierno, los patrones y los sindicatos, para proceder a incrementar el salario mínimo cada seis meses. Sin embargo, el gobierno con el acuerdo de los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y sin la más mínima resistencia de los sindicatos, ha optado por hacerla anual, lo que es completamente ilegal.

El sector privado, por medio del COSEP, confirmó que se reunirán con el Gobierno y los representantes de los trabajadores del país para la negociación del nuevo salario mínimo en Nicaragua, que tendrá vigencia por un año. (El Nuevo Diario; 4 de Enero del 2017).

Estas negociaciones además de ser ilegales son infructuosas porque no es posible determinar las necesidades económicas de la población cada 12 meses, ya que la devaluación de la moneda es al menos del 6% anual, sin incluir los efectos de la inflación internacional, y los incrementos de alimentos y bienes

básicos varían constantemente.

Incrementos de un solo dígito

Además de pretender hacer los incrementos anuales, estos no llegan ni siquiera a los dos dígitos. Desde que el FSLN recuperó el poder en el 2006, los sindicatos controlados por el sandinismo, han traicionado a todos los trabajadores, mientras sus allegados se recetan grandes salarios, dándole algunas prebendas a los mal llamados dirigentes sindicales, quienes utilizan sus cargos para negociar a cambio de migajas.

La Mesa Tripartita del Salario Mínimo aprobó el año pasado un 9% de incremento en el salario mínimo para nueve sectores económicos del país y de 8% para la pequeña y mediana empresa del país... de acuerdo con la ley, las partes tienen hasta ocho sesiones para negociar un salario mínimo y si no hay acuerdo, el gobierno podrá aprobar el reajuste. (El Nuevo Diario; 4 de Enero del 2017).

Negociaciones estancadas y gobierno receta aumentos conforme sus planes

Mientras las negociaciones se encuentran estancadas y no se llega a ningún acuerdo, el único que sufre y paga las consecuencias es la clase obrera. En el ínterin, presionado por el descontento de los trabajadores públicos que sienten que el salario se les esfuma, el gobierno recetó un aumento unilateral para los trabajadores del Estado de aproximadamente el 10%.

Las negociaciones sobre el salario mínimo en Nicaragua terminaron están estancadas en la quinta ronda, informó la Mesa Tripartita, pero con el aumento unilateral del gobierno, ya está dicha la última palabra: el tope es el 9%.

Los sindicatos acordaron aglutinar sus distintas propuestas en una sola, que consistió en un aumento del 9,5 %, refirió la Confederación General de Trabajadores (CGT Independiente)...Por su parte, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), propuso un aumento diferenciado, entre el 8,5 % y el 10 %, en dependencia del sector productivo... La mesa tripartita tiene cuatro sesiones más para llegar a un acuerdo, de lo contrario, el Gobierno decidirá el monto, según la legislación nicaragüense. Actualmente el

salario mínimo promedio en Nicaragua equivale a 180,70 dólares, menos del 50 % de lo que cuesta la canasta básica...El Gobierno de Nicaragua decretó el pasado 30 de enero un alza salarial de entre un 5 % y un 12,8 % para el sector público, que entró en vigor el miércoles 1 de febrero. (El Nuevo Diario; 2 de febrero del 2017).

FNT traiciona a sus afiliados, la CST aprovecha

Gustavo Porras es ahora presidente de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo sigue siendo el Secretario General del FNT. Con ello, el FNT muestra su verdadera naturaleza de central sindical controlada por el Estado.

Esta situación es aprovechada por Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST), organización rival del FNT, y que tiene la mayoría de sindicatos en el sector industrial de las maquilas y en la construcción. González sale ahora dando declaraciones beligerantes en los medios de comunicación, pero no rompe con los topes salariales impuestos por el gobierno de Daniel Ortega.

Por un salario mínimo promedio al de toda Centroamérica

Ya no podemos seguir pagando los platos rotos de la mala administración del Gobierno, mientras ellos se recetan grandes salarios y quiebran las instituciones del Estado, los trabajadores reciben migajas, el salario mínimo no cubre ni siquiera la canasta básica. El salario mínimo promedio es de 500 dólares en los países de Centroamérica, por lo tanto, eso debemos exigir, ya que tenemos los precios dolarizados. Otra reivindicación importante es la indexación de los salarios conforme el deslizamiento del dólar cada año.

Es hora de exigir un salario mínimo equitativo, igualitario y proporcional al salario mínimo en Centroamérica. Exijamos la renuncia de los mal llamados dirigentes sindicales y que sean los mismos trabajadores quienes a través de asambleas designen a sus representantes que irán a discutir el incremento salarial. Justicia para la clase obrera, es hora de salarios justos.

